

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL PERU

Durante el régimen dictatorial en el Perú, en la década desde 1990 al año 2000, se realizaron una serie de atentados contra los derechos humanos y otros crímenes, incluso de lesa humanidad, muchos de los cuales han llevado a la cárcel a quienes hicieron parte de ese gobierno, entre los cuales se encuentran el mismo ex Presidente de la República Alberto Fujimori, su asesor principal Vladimiro Montesinos, el ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional ex Almirante Salazar Monroe, el ex Jefe del Ejército ex general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, el ex Presidente del Congreso de la República Víctor Joy Way Rojas, ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, ex Ministros de Estado, entre otros que hacen un cifra considerable de personajes que están dando cuenta a la justicia; mientras que otros tantos se encuentran prófugos de la justicia, como el ex ministro de defensa y ex embajador del Perú en México, ex general del ejército Víctor Malca y muchos ex oficiales de las fuerzas armadas y policiales, además de empresarios, etc. Desde ese periodo (1990-2000) existe una clara colusión entre los personajes que gobernaron el Perú y el crimen organizado, tanto nacional como internacional y, en realidad se ha hecho aún muy poco para esclarecer una serie de delitos, especialmente los de colusión con el narcotráfico, tráfico financiero, el del lavado de dinero y otros. Existen riquezas no justificadas, que aún no investigan las autoridades peruanas. Actualmente es muy vistosa la actividad de los grupos criminales de las mafias internacionales, y son demasiado evidentes las operaciones que realizan esos grupos criminales, en colusión con los grupos delincuenciales locales, muchos de ellos con aparente legalidad en el país. Habiendo habido un desconocimiento y poca preparación profesional en la seguridad nacional y en las fuerzas armadas, de cómo operar contra los grupos criminales organizados, fue relativamente fácil para esas organizaciones contaminar progresivamente el tejido social peruano, al punto que en la actualidad se le considera una de las sociedades más corruptas de la región. Para las próximas elecciones municipales y regionales se ha denunciado oficialmente la vinculación con el crimen organizado de algunos de los candidatos y, aún no se han hecho públicas todas las evidencias que existen entre las mafias internacionales y algunos de los próximos candidatos a la Presidencia de la República, para las elecciones del 2011. Entre las acciones más conocidas en contra de los derechos humanos del gobierno de Fujimori, fue la solicitud de apoyo realizada a los gobiernos de otros países de la época, y fue así que muchos sistemas de inteligencia como de contrainteligencia en el mundo apoyaron la persecución que se realizó contra una serie de contendientes de ese régimen, en el mundo. El sistema de persecución que aún se realiza, financiado por capitales peruanos y extranjeros, es considerado jurídicamente como Genocidio Premeditado Plurime y también crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan con gases tóxicos, muchos de ellos destinados a uso militar, y suelen utilizarlos en cualquier lugar en donde se encuentren las personas sometidas a esas persecuciones, sean aviones, trenes, hoteles, habitaciones, centros comerciales, aeropuertos, contaminan los automóviles, medios de transporte público, los vestidos, etc., y no se respeta a las personas cercanas, sean estos mujeres, niños u otras personas; sistema que en la práctica es considerado de eliminación mafiosa. En el Perú esas organizaciones cuentan con una estructura organizacional de alto nivel, que incluye colusión en clínicas, hospitales, farmacias, lavanderías, restaurantes y otros lugares de servicio, donde es bastante fácil eliminar a las víctimas, con lo que suele denominarse 'eliminación invisible'. Gran parte de las víctimas han sido envenenadas con altas dosis de metales y otras sustancias tóxicas, especialmente en los hoteles y restaurantes, y en las casas o residencias se realiza en colusión con los empleados domésticos. Desafortunadamente existe una amplia lista de personas inocentes que ni siquiera se han enterado que progresivamente están siendo eliminadas con esas metodologías. Se busca sobre todo que las víctimas tengan decesos considerados normales por la medicina legal, para evitar reacciones de la justicia y de las organizaciones que defienden los derechos humanos. El sistema de inteligencia peruano en la época del régimen dictatorial de que presidió Fujimori, fue asumiendo actividades ilícitas que también se utilizan en otros sistemas de contrainteligencia, es decir adquirir servicios de empresa cuyo objetivo es realizar persecuciones y eliminaciones conocidas como invisibles, sin que se afecte a la imagen de los gobiernos que los contratan. Es sabido en los ambientes de inteligencia en el globo, como operan los sistemas de contrainteligencia de muchos países, realizando operaciones camufladas, muchas de ellas realizadas en complicidad con los grupos criminales en diferentes lugares del planeta. Cuando se visita el Perú, especialmente las provincias en el interior de ese país, se notará muy fácilmente el nivel de incidencia en el tejido social que tiene la criminalidad organizada y como operan esos grupos en el cotidiano vivir de ese pueblo. Se constatará además el alto nivel de contaminación que existe en los hoteles y restaurantes, en los medios de transporte de alto y hasta el bajo nivel, las altas temperaturas creadas artificialmente que se podrán sentir con notable facilidad, y tantas otras sensaciones muy conocidas en los ambientes criminales de otros países que han atravesado recientemente por un conflicto armado o similares. La colusión de esos grupos con las autoridades locales es demasiado evidente en todos los aspectos, los desplazamientos de aviones privados sin permisos regulares es vista de forma regular y normal, el aeropuerto internacional es administrado por una sociedad colombiana en donde no hay acceso para control de parte de las autoridades peruanas y las operaciones de carga no están sujetas a los controles de rutina por las fuerzas policiales y de aduana, de forma normal. En fin, es un país que de modo casi natural ha sido

convertido en dependiente del crimen organizado y no existe ningún interés en realizar verdaderos cambios a las estructuras existentes para combatir a esas fuerzas delincuenciales nacionales e internacionales, especialmente por el temor a esas organizaciones o por colusión.